

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN -

Medellín, cuatro (4) de diciembre dos mil veintitrés (2023)

Apelación auto

Exp.020-2019-00210-02

Vencido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala Quinta de Decisión Laboral resuelve el recurso de apelación interpuesto por la ORPORACIÓN DEPORTIVA CLUB ATLÉTICO BUCARAMANGA S.A contra el auto que aprobó la liquidación del crédito dentro del proceso ejecutivo a continuación de ordinario que adelanta en su contra VÍCTOR EMILIO LUNA GÓMEZ.

ANTECEDENTES:

Por decisión que emitió el juzgado de conocimiento, que lo es el Veinte Laboral del Circuito de Medellín el 04 de junio de 2019 (Págs. 331-334 Archivo 01), se libró mandamiento ejecutivo en contra del CLUB ATLÉTICO BUCARAMANGA S.A., para obtenerse el pago de la suma de: \$28.418.009 por salarios adeudados, \$5.916.666 por cesantías, \$420.083 por intereses a la cesantía, \$5.916.666 por prima de servicios, \$2.958.333 por vacaciones, \$239.999.760 por concepto de indemnización moratoria, además de los intereses moratorios fijados por la Superintendencia Financiera causados a partir del 20 de octubre de 2010, calculados a la fecha del auto en \$519.311.481, más los que se siguieran causando, y las costas del proceso ejecutivo.

La ejecutada fue notificada por conducta concluyente, quien se abstuvo de arrimar escrito de excepciones (Págs. 349-350 Archivo 01 y Archivo 03); sin embargo, por memorial que se allegó el 27 de julio de 2023 Archivo 11) la sociedad puso en conocimiento un convenio al que llegaron las partes para poner fin al proceso, acordando pagar \$375.000.000, cancelados \$150.000.000 con antelación, luego se realizaron tres (3) transacciones el 28 de agosto de 2019 por \$39.375.000, \$33.750.000 y \$39.375.000, la primera, dirigida al beneficiario Guillermo García y las restantes, a Víctor Emilio Luna. Se informó igualmente, que el 15 de octubre de 2019 se consignaron \$71.000.000 y el 30 de noviembre de 2019 igual monto, oportunidad última en la que se incluyó el valor de \$29.762.941 por costas procesales, para un total pagado de \$404.762.941, con lo que se señaló satisfecha la obligación con el demandante.

Por audiencia que se celebró el 04 de agosto de 2023 (Archivo 13), se declaró el pago parcial por la suma de \$404.762.941, ordenándose continuar con la ejecución por el remanente de las obligaciones, requiriéndose a las partes para presentar la respectiva liquidación del crédito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 446 del CGP.

La parte ejecutante, arribó la respectiva liquidación por la suma de \$846.684.410,40 por el saldo de capital, más \$57.700.421,62 por costas procesales con sus intereses (Archivo 14), pronunciamiento sobre el que la ejecutada se apartó, en tanto insiste que con el actor se celebró un acuerdo para dar fin al proceso, donde se comprometió la sociedad a reconocer \$375.000.000, llamando la atención que se quiera hacer efectivo el mandamiento de pago del 04 de julio de 2019 cuando hubo allanamiento a recibir las sumas de dinero sin objeciones presentadas, operando la figura del llamamiento a la mora por cuanto el demandante de forma tácita guardó silencio, terminando por aceptar las modificaciones en las fechas de los pagos, por lo que a su juicio el crédito se halla en ceros, pues aunque el crédito total librado es de \$802.940.998, el acuerdo de \$375.000 se cubrió con las siete consignaciones realizadas y el pago cancelado previo al acuerdo por \$150.000.000 (Archivo 18).

Por auto del 10 de octubre de 2023 el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín aprobó la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante en \$846.684.410,40 (Archivo 19).

Sobre esa decisión la ejecutada interpuso recurso de reposición y en subsidio suyo el de apelación, insistiendo en el acuerdo de pago suscrito por las partes del que emergió el pago de \$375.000.000 con descuento de \$150.000.000 reconocidos con antelación, recibidos a conformidad por el actor, aduciendo que como se presentó allanamiento a la mora, el acuerdo nunca perdió legitimidad y se ejecutó a cabalidad. Adujo entonces que la sociedad actuó con la convicción de cumplir lo pactado sin abstraerse de sus obligaciones conforme a la transacción suscrita, pero que el demandante guardó silencio desde el 2019 y solo hasta el 2023 retomó el proceso dejando ver su único interés lucrativo a expensas de la sociedad más allá de lo acordado por vía legal en agosto de 2019. Cuestiona que el auto que aprobó la liquidación del crédito no haya mencionado su objeción y omita el pago total de la deuda y se desconozca el cumplimiento del acuerdo para ser cobrada una suma adicional.

Sobre el primer recurso el Juez lo negó por presentarse de manera extemporánea, y concedió el segundo (Archivo 22).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero anotar que la providencia cuestionada es susceptible de apelación conforme a lo previsto en el numeral 10° del artículo 65 del CPTSS, según el cual, es apelable el auto que resuelva sobre la liquidación del crédito en los procesos ejecutivos.

Según lo descrito, corresponde a la Sala determinar si la liquidación del crédito aprobada por la autoridad judicial de conocimiento es atinada en coherencia con las obligaciones incluidas en el mandamiento de pago o si, por el contrario,

debe sufrir alteración en virtud al acuerdo transaccional suscrito entre las partes por valor total de \$375.000.000.

Pues bien, el artículo 446 del CGP, aplicable por la remisión analógica prevista en el artículo 145 del CPT y de la SS, establece que la liquidación del crédito se realizará “*de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo*” y se podrán formular objeciones relativas al estado de cuenta dentro del traslado de tres días otorgado, donde las partes han de presentar sus respectivas liquidaciones, sobre las que el juez decidirá si las aprueba o modifica, con base al contenido de la sentencia que contiene de manera clara, expresa y exigible, las obligaciones que se asignan a una parte en favor de la otra (artículos 306 y 422 ibídem) y los pagos acreditados dentro del trámite, para definir el saldo de la orden de apremio.

Con base en esas precisiones, como no es discutido el valor objeto de ejecución al momento de librar mandamiento ejecutivo, recae lo debatido en esta oportunidad es en el acuerdo suscrito entre los intervinientes del trámite que enuncia la ejecutada, el que por cierto, no obra en el plenario para dar análisis a su alcance e intención de las partes con su suscripción, debiendo apuntarse al respecto que como es sabido, para que un acuerdo de transacción surta efectos, ese negocio jurídico debe cumplir con la totalidad de requisitos que la Corte Suprema de Justicia en nuestra especialidad ha enlistado y que son: i) la existencia de un derecho litigioso, eventual o pendiente de resolver; ii) que se trate de un derecho que no tiene la connotación de cierto e indiscutible porque no hay certeza sobre su dimensión y no se ha configurado una consecuencia jurídica¹; iii) hay ausencia de vicios del consentimiento -error, fuerza o dolo-, y iv) lo acordado propicia generar concesiones recíprocas y mutuas para las partes (Ver AL607-2017, AL1761 y SL4243-2022).

En este campo, “*...un derecho será cierto, real, innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no*

¹ T-040 de 2018.

hay ningún elemento que impida su configuración o su exigibilidad...” (Ver SL4464-2014 y SL1639-2022).

Basta entonces encuadrarnos en el trámite dentro del que se generó el pacto en el que ha insistido la sociedad apelante, y acudir al contenido del artículo 15 del CST², para pregonar que un acuerdo transaccional no es viable que tenga efectos para dar por satisfecha la obligación librada por estar en frente de derechos ciertos cuya discusión fue resuelta judicialmente, y por tanto, hay certeza sobre las obligaciones que se pretenden transar, por manera que si el ejecutante persiste en la ejecución del total de lo adeudado, a la agencia judicial no le era permitido dar cabida a un convenio del que se ignoran sus términos, para dejar de lado derechos ya declarados con efectos de cosa juzgada.

Es así como, atendiendo el pago por un total de \$404.762.941 cuyas constancias obran en la carpeta de “*pruebas*” del “*02CuadernoEjecutivo*”, el crédito resulta adecuadamente aprobado en la suma de \$846.684.410,40 correspondientes a \$283.629.517 por capital una vez restada la suma exacta que fue pagada, y a \$563.054.893,40 por intereses, cálculo sobre el que no se presentó objeción, dado que la discrepancia que dio lugar al recurso se enmarca en el desconocimiento del plurimentado acuerdo entre las partes, con el que se pretende tener por saldada la deuda con el pago de \$375.000.000, asunto que se dejó claro no se hace posible dentro del trámite de ejecución que se adelanta.

Es así como, la liquidación del crédito objeto de aprobación está sujeta a la legalidad y la realidad procesal, por lo que, en ese contexto, y sin lugar a mayores elucubraciones, el auto cuestionado habrá de ser confirmado con costas a cargo del Club Atlético Bucaramanga S.A, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$300.000.


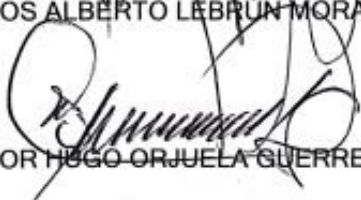
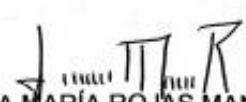
² “Es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles”.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **CONFIRMA** el auto apelado de fecha y procedencia conocidas por las razones expuestas. Costas como quedó dicho en la parte motiva.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS**.

Los Magistrados,


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Certifico: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 209 fijados el 5 de diciembre de 2023
en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El Secretario.